

viernes, 28 de diciembre de 2012

Documento, Militarización del país

Sobre el tema trascendental de la militarización del país.

Existen algunos temas que implícitamente no aparecen relacionados en el preámbulo del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, ni en la Agenda contenida en el mismo acuerdo suscrito con el Gobierno colombiano. Sin embargo, no se puede evitar al profundizar en algunos de ellos, pues no se trata de un recetario anquilosado donde solo cabría la definición de la relación de términos contenidos tanto en el Acuerdo General como en la Agenda de seis puntos. Esto quiere decir que se puede opinar y proponer sobre temas como Soberanía Nacional, Sistema Económico, Régimen Político, etc.

Quiero referirme a uno de ellos que, por su importancia, es necesario fijar una posición, pues tiene que ver con lo consignado en el preámbulo con relación a que “...Una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial...”. Pues la paz no es simplemente el silencio de los fusiles y menos de una sola de las partes.

Si, se trata del tema de la **SOBERANÍA NACIONAL Y MILITARIZACION** del país que tiene implicaciones igualmente con la posibilidad de una paz no solo nacional sino regional y mundial. En primer lugar la existencia de acuerdos militares con potencias extranjeras que como ocurre con “Plan Colombia” y el mal llamado “Plan Patriota” donde los gringos vienen poniendo las armas y el pueblo colombiano los muertos. Porque el régimen colombiano ha sido indigno, plegado y arrastrado al cumplimiento de las estrategias de los EE.UU. que, bajo el pretexto de la “lucha contra las drogas y las guerrillas”, busca entre otros los siguientes objetivos:

- Asegurar el control vital de una zona del dominio imperial que es América Latina.
- Controlar la biodiversidad y en general los recursos naturales de la región, en especial de la Amazonía y la Orinoquía.
- Consolidar su dominio ideo-político en una zona que consideran de desórdenes interiores en los países vecinos que forman parte del ALBA, particularmente contra Venezuela (petróleo) y Bolivia (litio).
- Imponer su política neoliberal del mal llamado libre comercio.

No hay que olvidar que con la firma del “Plan Colombia” en el año 2000 la oligarquía colombiana autorizó al gobierno de los EE.UU. no solo la utilización de siete bases militares (Palanquero, Tolemaida, Apiay, Larandia, Bahía Málaga,

Cartagena y Malambo) sino lo que es más grave la utilización de cualesquiera de las bases comerciales existentes en el país, convirtiéndolas en avanzadas militares, con total inmunidad (léase impunidad) para el personal militar estadounidense y de “contratistas” (mercenarios) que tienen carta blanca para violar las leyes colombianas.

De todas estas bases militares, Palanquero es la principal base aérea de combate en el país, financiada por el Plan Colombia con 46 millones de dólares, con pista para todo tipo de aviones y a la cual le fue levantada la sanción gringa por la participación de algunos de sus mandos en la masacre de Santo Domingo..

“El 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo, del municipio de Tame, Arauca, un helicóptero UH-1H de matrícula FAC-4407 de la Fuerza Aérea Colombiana – FAC-, arrojó un explosivo cluster, con el apoyo de un avión perteneciente a la empresa estadounidense OXY, causando la muerte de 17 civiles, entre quienes estaban: Luis Carlos Neite Méndez (5 años), Edna Margarita Bello (5 años), Jaime Castro Bello (4 años), Deysy Catherine Cárdenas Tilano (7 años), Jorge Vanegas (10 años); Wilfran Gaitán Serrano (13 años) y, Giovanni Hernández Becerra(17 años); y resultaron 25 heridos, entre los cuales se encuentran 9 niños y niñas”.

El Estado promovió la impunidad con sus actuaciones posteriores a la masacre, entre ellas permitir que la investigación estuviera a cargo de la Justicia Penal Militar por un largo periodo y que ahora, a pesar de la enorme inconformidad y protestas levantadas en el país contra el proyecto de ley se pretende ampliar el fuero militar que implicara mayor impunidad.

Sin pena ni gloria el gobierno colombiano, con la complicidad de las élites financieras y los grandes medios de comunicación, firmaron tal Acuerdo recibiendo a cambio diariamente entre 2 y 3 millones de dólares en “ayuda” militar con destino a la fuerza pública (ejército, aviación, armada, policía, organismos de seguridad, etc.), ayudándole a EE.UU. a suplir en Colombia las operaciones antidrogas que realizaba en la base ecuatoriana de Manta, de donde el nuevo gobierno de Rafael Correa en un acto de soberanía los expulsó.

Colombia es uno de los países más militarizados del planeta, pues cuenta con un ejército de más de 600 mil efectivos, que entrena a otros de Panamá, Perú, Chile, África y oriente medio; el más moderno armamento ofensivo y con experiencia de participación no solo en guerras internas sino internacionales como integrante de fuerzas multinacionales MFO (**Multinational Force and Observers**), fuera del marco de la ONU, participando al lado de los EE.UU. en guerras como la de Corea y el Sinaí. Además de la presencia de cuerpos armados paramilitares, muchos de ellos tolerados por algunos mandos del ejército y la policía, es conocida la presencia de tropas y organismos de inteligencia estadounidense e israelita, todo lo cual constituye una amenaza latente para los gobiernos democráticos que se vayan estableciendo en América Latina.

Es por todo esto que las FARC-EP en su Plataforma Bolivariana por la Nueva

Colombia *“Invitamos a todos los colombianos que anhelan una patria soberana, en desarrollo y en paz, a trabajar por la conformación de un nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo, que se comprometa: (No solo a una) Revisión total de los pactos militares, tratados comerciales y convenios lesivos para la nación”,* sino que, además planteamos en su segundo punto:

“2. La doctrina militar y de Defensa Nacional, será BOLIVARIANA. En cumplimiento del mandato del libertador, los militares emplearán su espada en defensa de las garantías sociales. Las nuevas Fuerzas Armadas se distinguirán por su amor al pueblo y el odio a la tiranía. Serán garantes de la soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos, y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos. La Policía Nacional dependerá del Ministerio del interior y justicia, reestructurada para que cumpla su función preventiva; moralizada y educada en el respeto de los derechos humanos”.

Cordialmente.

Bernardo Salcedo

La Habana, dic.29 de 2012